



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RECIBIDO
Unidad Para Las
Víctimas
Fecha: 11 SEP 2018

RESOLUCIÓN No. 2018-51662 del 23 de Julio de 2018 FUD. BI000356486

Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

LA DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Atendiendo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, el Decreto 4802 de 2011, la Resolución No. 00677 de fecha 14 de octubre de 2014 y Acta de Posesión No. 1195 de fecha 20 de octubre de 2014 y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4802 de 2011 determinaron como función de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, *"decidir la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas y resolver los recursos de la vía gubernativa de su competencia"*

Que el (la) señor(a), **JOSE EDWIN TELLEZ** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79770334 rindió declaración ante la **PERSONERIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ, D.C.**, del municipio **BOGOTÁ, D.C.** del departamento de **BOGOTÁ, D.C.** el día **15/05/2018**, para que de acuerdo a los artículos 3 y 156 de la Ley 1448 de 2011, y al procedimiento de registro contenido en el Libro II Título II Capítulo III del Decreto 1084 de 2015, se le inscriba en el Registro Único de Víctimas – RUV.

Que dicha declaración fue recibida en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas el día **15/05/2018**.

Que declaró el(los) hecho(s) victimizante(s) de **Secuestro, Desplazamiento Forzado, Abandono o despojo forzado de bienes muebles, Amenaza**, en la forma y oportunidad legal establecida en los artículos 156 de la Ley 1448, y 2.2.2.3.1, 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.7 del Decreto 1084 de 2015.

Que la Administración al analizar los hechos victimizantes acudirá a la evaluación de los elementos jurídicos, de contexto, y técnicos que le permitan fundamentar la decisión.

Que la valoración se fundamenta en tres presupuestos jurídicos, que son: i) La obligación de interpretar los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia¹, ii) los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, entre otros² y iii) el principio de enfoque diferencial³.

Que respecto a los elementos de contexto, se consultará información sobre dinámicas, modos de operación y eventos relacionados directamente con el conflicto armado en la zona y tiempo específicos, que permitan evidenciar la situación de orden público al momento de la ocurrencia de los hechos.

Que frente a los elementos técnicos, se tendrá en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis, para lo cual se realizarán consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes.

¹ El artículo 93 de la Constitución Política establece: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

² El artículo 158 de la Ley 1448 de 2011 establece que las normas que orientan a los servidores públicos encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz de los principios de favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial, participación conjunta, confianza legítima, trato digno y habeas data.

³ El principio de enfoque diferencial, establecido en el artículo 13 de la ley 1448 de 2011, parte del reconocimiento de la existencia de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, dentro de los cuales se encuentran los jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado que en razón a sus condiciones y características particulares requieren especiales garantías y medidas de protección por parte del Estado.



Hoja número 2 de la Resolución **2018-51662 del 23 de Julio de 2018**: Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

Que se considerarán víctimas para los efectos de la Ley 1448 de 2011, según su artículo 3 “(...) a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (...)”.

Que el (la) señor (a) JOSE EDWIN TELLEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79770334, declaró los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado; junto a los miembros de su grupo familiar, ocurridos el día 03 de mayo de 2018, en la vereda Guaimitos el municipio de Icononzo (Tolima), donde afirmo residir durante cinco (05) años, dirigiéndose hacia el barrio Villa Gloria de la ciudad de Bogotá D.C: (Cundinamarca). Como consecuencia del desplazamiento se ve obligado (a) a dejar abandonado sus bienes muebles e inmuebles; debido al accionar de presuntos grupos armados.

Que es pertinente señalar los principales aspectos que se encontraron en la narración de los hechos, donde el (la) deponente manifiesta que: “(...) me encontraba en mi casa llegaron dos hombres vestidos de civil y portando armas cortas en la cintura, y me dijeron que tenía que pagar las cuotas que tenía que ponerme al día, que además yo estaba de muy sapito que ellos sabían que yo estaba ayudando en cosas que no me importaban (...) que si no pagaba que tenía que irme y que me iba sin nada, yo salí ese día (...)”.

Para la valoración de los hechos declarados, como parte de las herramientas jurídicas resulta relevante considerar frente al hecho victimizante de Amenaza el Artículo 4.2 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, donde se prohíbe la amenaza de atentar contra la vida, la salud, la integridad física o mental, la dignidad personal y de realizar tratos crueles humillantes y degradantes (quedarán prohibidas en todo tiempo y lugar [...] Las amenazas de realizar los actos mencionados). En complemento, el Artículo 13.2 indica que “no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos de amenaza de violencia [...]”. Ante esta situación la/s víctima/s afrontan un riesgo potencial, sobre el cual se deben tomar las medidas que amerite el caso.

De igual forma para el hecho victimizante de desplazamiento forzado, la Ley 1448 de 2011 define en su Parágrafo 2 del Artículo 60, como víctima de este hecho a: “(...) toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente Ley. (...)”. Que adicionalmente es de mencionar que esta valoración se acogerá a lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario y a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, en virtud a evidenciar que el hecho ocurrido fue en el marco del conflicto armado colombiano, para tales efectos es conveniente señalar que, acorde a lo dispuesto por el artículo 17 del Protocolo II a los Convenios de Ginebra en lo relativo a la prohibición de los desplazamientos forzados en el marco de los conflictos armados internos, “No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.

Asimismo, es importante señalar que para el hecho victimizante de abandono de bienes muebles, se tiene el artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 el cual establece: “se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia.”

En concordancia con lo anterior, es preciso señalar que el artículo 655 del código civil modificado por el art. 2, Ley 1774 de 2016 define los bienes muebles en los siguientes términos: “Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.”

De otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-715 de 2012 se pronunció en relación con las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, concluyendo que no se



Hoja número 3 de la Resolución **2018-51662 del 23 de Julio de 2018**: Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

configura omisión legislativa relativa contra segmentos normativos que no incluyen bienes muebles y que de ello se desprenda la generación de una desigualdad negativa. Además, respecto de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno concluyó que no existe el deber categórico impuesto al Legislador para que incluya bienes muebles como parte de la restitución, por cuanto la reparación integral cuenta con otras vías como la indemnización o vía judicial.

De acuerdo a lo anterior, “la Corte acepta que les asiste parcialmente razón a los demandantes, en cuanto alegan que el Estado tiene la obligación de reparar integralmente a las víctimas, y que ello implica la adopción de medidas para restablecer los derechos conculcados a ésta por la ocurrencia del daño, lo cual no se logra solamente garantizando la restitución de los bienes inmuebles que les han sido usurpados, despojados o han sido abandonados, sino que es necesario también que en la reparación el Estado tenga en cuenta los demás daños patrimoniales que se le han causado a las víctimas. Sin embargo, encuentra la Sala que yerran al considerar que la única vía para la reparación de los bienes muebles es necesariamente la medida de restitución, por cuanto la reparación integral cuenta con otras vías como la indemnización, en donde el Estado debe tener en cuenta necesariamente el daño patrimonial causado a las víctimas por el despojo, usurpación o abandono forzado de sus bienes muebles, tales como vehículos, maquinaria, equipos de trabajo, semovientes, entre otros.”

A más de, en la Sentencia T-821 de 2007 la Corte Constitucional hizo referencia a los derechos fundamentales de las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos así: “si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral.”

Al respecto, los tratados y convenios ratificados por Colombia a través del Bloque de Constitucionalidad a saber; el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949 y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas. Establecen como derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento, la restitución de su patrimonio, dentro del que se encuentra los bienes muebles.

Así las cosas, esta Dirección procederá a examinar el caso en concreto con la finalidad de determinar la viabilidad del Reconocimiento en el Registro Único de Víctimas del hecho victimizante de despojo de bienes muebles a (la) (el) deponente, para tal fin, es necesario analizar la situación fáctica con miras a establecer si se enmarca en los parámetros establecidos en los artículos 3 y 74 de la Ley 1448 de 2011, los pronunciamientos jurisprudenciales y tratados y convenios ratificados por Colombia a través el Bloque de Constitucional.

Que sumado a lo anterior, en la documentación adjunta se evidencia el desplazamiento de JOEDT TELLEZ ACERO y JINEZ SOFIA TELLEZ FONSECA (menores de edad), por lo que es necesario señalar que el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la Ley tales como los jóvenes, niños y niñas (...)” Esto, teniendo en cuenta la protección integral a la que tienen derecho, el interés superior de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y la prevalencia de sus derechos, dado que “(...) en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y adolescentes, prevalecerán los derechos de estos (...)” (artículo 9, Ley 1098 de 2006) y en reconocimiento del impacto cualitativamente diferencial y agravado del desplazamiento forzado sobre los menores de edad, pues “(...) Para un bebé, niño, niña o adolescente, la experiencia vital del desplazamiento forzado es intrínsecamente distinta de lo que puede ser para un hombre o una mujer adultos. El desplazamiento forzado afecta de manera diferencial a las personas menores de 18 años, por lo cual la respuesta del Estado ha de ser igualmente diferencial, además de prioritaria (...)” (Auto 251 de 2008).

Que de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas por el (la) deponente, se procedió el día 23 de julio de 2018 a indagar sobre el contexto de la zona en la que se configuro el hecho victimizante, encontrando una publicación realizada por la Defensoría del Pueblo, el día 30 de marzo de 2017, titulada Informe de Riesgo N° 010-17 A.I., la cual hace referencia al orden público del departamento de Tolima, a través del siguiente párrafo: “(...) En distintas alocuciones públicas, en declaraciones ante los medios y en instancias institucionales como la



Hoja número 4 de la Resolución **2018-51662 del 23 de Julio de 2018**: Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad⁴, el Defensor del Pueblo se ha pronunciado acerca de la gravedad de la situación de riesgos, atentados y amenazas que vienen padeciendo los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. El Defensor ha instado permanentemente a las autoridades a adoptar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad y libertades de estas personas. En igual sentido ha llamado la atención sobre la necesidad de avanzar en las investigaciones y superar la impunidad por las violaciones, dentro de las que se cuentan homicidios y desapariciones forzadas. En un primer recuento de estos hechos, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas, señaló que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, se registraron al menos 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones. Las víctimas de estos hechos correspondían a líderes sociales y defensores de derechos humanos quienes desarrollaban sus actividades en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. (...) Es así como, en el lapso de catorce meses comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, se han registrado 156 homicidios contra los líderes sociales, comunitarios y defensores(as) de derechos humanos en los departamentos de Antioquia [25], Arauca [6], Atlántico [3], Bolívar [6], Caldas [1], Caquetá [2], Casanare [2], Cauca [44], Cesar [4], Córdoba [8], Cundinamarca [9], Chocó [3], Huila [1], La Guajira [2], Magdalena [3], Meta [2], Nariño [7], Norte de Santander [8], Putumayo [3], Risaralda [5], Santander [1], Tolima [4] (...).

Que adicionalmente se verifico la situación de orden público del departamento de Tolima para el año 2018, a través del documento "Varias versiones hay en el Tolima por conformación de estructuras del ELN", publicada por la página Caracol Radio, el día 15 de febrero de 2018, encontrando la siguiente información: "(...) La Fuerza pública mantiene versiones encontradas frente a la posible conformación de estructuras del ejército de liberación nacional (ELN) en el Tolima. Según el comandante de la Sexta Brigada del Ejército el Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño, "en el Tolima, especialmente en la zona norte, en municipios como el Líbano, se estaría gestionando la conformación de una estructura de ese grupo", sin embargo se han venido realizando contundentes acciones por parte de las autoridades que en varias oportunidades no han permitido que miembros el ELN tomen control en el departamento. Por su parte el comandante de la Policía del Tolima Coronel Jorge Eduardo Esguerra, expresó "que no hay ningún tipo de información que permita dar veracidad que grupos como el ELN estén tratando de agruparse en el norte tolimese". Las autoridades locales del Líbano señalaron que han recibido las denuncias de la presencia de hombres armados sobre el sector del corregimiento de Santa Teresa, así lo explicó el alcalde German Castellanos, quien pidió claridad a las autoridades frente a estos hechos y si se trataría de delincuencia común o efectivamente de grupos del ELN. (...)".

Por consiguiente lo anteriormente expuesto evidencia que la zona en la cual tuvo lugar los hechos declarados por el (la) deponente, es un escenario que históricamente ha presentado una alta influencia y presencia de actores armados, los cuales con su accionar han generado diferentes vulneraciones a la población, como lo son las Desapariciones Forzadas, Reclutamientos, Desplazamientos Forzados, Amenazas y toda una serie de eventos violentos; es así como la población ve en el desplazamiento un mecanismo de protección, usado para salvaguardar su vida e integridad de cara a la situación de orden público existente en el departamento

Que para el análisis de los hechos victimizantes declarados, como parte de las herramientas técnicas han sido consultadas el día 23 de julio de 2018, todas las personas relacionadas en la presente resolución, en las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, en la Red Nacional de Información se realizó la consulta en el Sistema de Información de Reparación Administrativa (SIRA) Decreto 1290 de 2008, en el Sistema de Información Víctimas de la Violencia (SIV) Ley 418 de 1997, en el Registro Único de Víctimas (RUV) Ley 1448 de 2011 y en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) Ley 387 de 1997 y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encontrando la siguiente información:

En el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) Ley 387 de 1997, se encuentra a JOEDT TELLEZ ACERO, en una declaración anterior con registro 577762, hecho acaecido en la ciudad Bogotá D.C. (Cundinamarca), el día 04 de noviembre de 2007, bajo el estado de NO INCLUSIÓN. Situación que al analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar no genera contradicción con lo declarado y analizado en la presente resolución.

Que tomando en consideración el fundamento jurídico anterior, y los hechos narrados por el (la) declarante, donde manifiesta que fue amenazado (a) y obligado (a) a desplazarse de su lugar de residencia habitual, como consecuencia del temor fundado por las acciones perpetradas de grupos armados, se procederá a RECONOCER



Hoja número 5 de la Resolución 2018-51662 del 23 de Julio de 2018: Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

a (el) (la) señor (a) JOSE EDWIN TELLEZ los hechos victimizantes de amenaza, desplazamiento forzado y abandono forzado de bienes muebles. Adicionalmente RECONOCER a JOEDT TELLEZ ACERO y JINEZ SOFIA TELLEZ FONSECA los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado, en el Registro Único de Víctimas -RUV.

Por otra parte, se le indica a (el) (la) señor (a) JOSE EDWIN TELLEZ, que en el evento en que se considere afectado (a) por el hecho victimizante de abandono de bienes INMUEBLES, en caso de querer el reconocimiento respectivo de dicha situación, la Entidad que tiene la competencia legal para asumir este hecho victimizante en particular, es la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual se encuentra adscrita al Ministerio de Agricultura y se encuentra fundamentada en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 - REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE, la cual es la encargada de iniciar el correspondiente trámite de verificación del predio objeto del registro, en donde se podrán aportar pruebas documentales que le permitan acreditar su propiedad. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral (...). Adicionalmente es importante dejar claridad que La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas no le corresponde pronunciarse sobre este hecho victimizante (Despojo de Tierras), por ende le corresponde a la Unidad de Restitución de Tierras.

Que analizados los elementos encontrados respecto de la verificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidas en la declaración, se concluyó que los hechos victimizantes de amenaza, desplazamiento forzado y abandono forzado de bienes muebles, declarados por (el) (la) deponente se enmarcan dentro de los preceptos constitucionales y legales anteriormente mencionados, por lo cual es viable jurídicamente incluir a (el) (la) señor (a) JOSE EDWIN TELLEZ el hecho victimizante de abandono forzado de bienes muebles y junto a su grupo familiar relacionados en la declaración, los hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas -RUV.

Es preciso mencionar que dado el caso en que las personas hayan obtenido el registro alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción u ocultando las que la hubiesen impedido, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas procederá de manera inmediata con la revocatoria de su inscripción en el Registro Único de Víctimas -RUV- sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, en concordancia con los artículos 157, 198 y 199 de la Ley 1448 de 2011 y los artículos 2.2.2.4.1 y 2.2.2.4.2 del Decreto 1084 de 2015.

Que adicionalmente el (la) señor (a) JOSE EDWIN TELLEZ identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79770334, manifestó ser víctima junto con su grupo familiar por el hecho de secuestro, hecho ocurrido el día 09 de junio de 2016 en la vereda Guaimitos del municipio de Icononzo (Tolima), debido al presunto accionar de grupos armados.

Que es pertinente señalar los principales aspectos que se encontraron en la narración de los hechos, donde el (la) deponente manifiesta que: "(...) me abordaron unas personas que se movilizaban en tres camionetas de estacas (...) me obligaron a que me subiera a una de las camionetas que ellos llevaban y me internaron por zona boscosa (...) me retuvieron durante dos semanas (...) que yo tenía que colaborar con la causa (...) llegamos a un acuerdo que yo les di cinco millones de pesos y que yo podía continuar hay en la zona (...)".

Que para el análisis del hecho, se toma en consideración lo señalado en el artículo 2.2.2.3.11. del Decreto 1084 de 2015 que establece: "(...) La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas fijará los procedimientos de valoración, los cuales orientarán la metodología a ser aplicada en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. (...) Para la verificación de los hechos victimizantes consignados en la declaración, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas realizará consultas en las bases de datos y sistemas que conforman la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas, así como en otras fuentes que se estimen pertinentes. En todos los casos, se respetará la reserva y confidencialidad de la información proveniente de estas fuentes. (...)":

Con relación a lo anterior y dentro de los elementos referentes al caso, es importante anotar que para el análisis y caracterización del caso se parte de lo contenido en el Parágrafo 6 del Artículo 156 de la Ley 1448 del 2011, el cual establece que: "(...) La víctima podrá allegar documentos adicionales al momento de presentar su declaración



UNIDAD PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Hoja número 7 de la Resolución **2018-51662 del 23 de Julio de 2018**: Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015.

decisión que concede el registro, proceden los recursos de reposición ante el funcionario que tomó la decisión y de apelación ante el Director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de que trata la presente ley, dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de su comunicación. Lo anterior, de conformidad con el artículo 157 de la Ley 1448 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de Julio de 2018

GLADYS CELEIDE PRADA PARDO
DIRECTORA TÉCNICA DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Proyectó: marrodriguezs

Revisó: Laura F.